

Las últimas subidas de energía eléctrica han supuesto para la industria básica un incremento de un 30% en dos años. Con todos nuestros deberes hechos con plantas industriales punteras en eficiencia a nivel mundial y en pleno momento de pre negociación con el sector eléctrico para salir al mercado. Mientras, para los ciudadanos la subida en los mismos dos años se ha limitado al 10%. Esta situación no puede ser valorada más que de forma negativa por cualquier empresario nacional o extranjero que se plantee mantener o iniciar inversiones en este país.

Lo anterior no puede entenderse como una amenaza de deslocalización sino como una reflexión seria, que es que un país como España, la 8ª potencia industrial del mundo, no puede trasladar a la línea de flotación de la competitividad de las empresas, costes energéticos que no se quieren trasladar a unos ciudadanos cuya renta per cápita media ya es comparable, si no superior, a la italiana. En un país en el que hay más teléfonos móviles que habitantes, por poner un ejemplo de coste de un servicio que, sin duda, repercute más en la renta de las familias que la energía eléctrica.

Cara al futuro, hay que tener en cuenta que buena parte del precio de la luz seguirá siendo regulado. Esta tendencia de trasladar a la industria lo que no se quiere trasladar al ciudadano no puede continuar si se quiere mantener la competitividad industrial del país y el tejido industrial correspondiente, que es el que aporta empleo cualificado y estable, además de un soporte a los servicios.

Dicho de otra manera, si hay que aceptar que en el mundo globalizado y liberalizado no se puede hacer política industrial desde la tarifa eléctrica, lo que no puede aceptarse de ninguna manera es que desde la tarifa eléctrica se haga política anti industria.

Ese 30% de subida en dos años solo ha podido ser absorbido sin dramas porque una parte de la industria básica, pero no toda, está inmersa en un momento de fuerte demanda global. Sin embargo, en mercados globalizados los precios nunca se mantienen al alza de forma indefinida, y ya sabemos que una parte de nuestra industria empieza a estar de vuelta de esa situación positiva. En contraposición, las subidas de tarifa se consolidan, y en nuestro caso coincidiendo en el proceso de negociaciones de contratos a largo plazo con nuestros proveedores eléctricos.

En pleno proceso de paso ordenado de tarifa a mercado, y con el objetivo de no perder competitividad eléctrica, lo que necesita la industria básica española es visibilidad a largo plazo para que la multinacional, sea extranjera o nacional, siga viendo rentable invertir en España en industrias competitivas, aunque sean intensivas en energía eléctrica, en lugar de preferir hacerlo en Francia, o en Finlandia, o en Bélgica, por poner ejemplos europeos.

La industria básica está decidida a poner lo mejor de su parte y está segura de que cuenta para ello con el Ministerio de Industria, no "para conceder subvenciones", sino para propiciar un paso ordenado de tarifa a mercado, proceso que se está demostrando muy complejo en todos los países europeos. En todos los casos hace falta una colaboración estrecha del trinomio Gobierno-Industria-Sector eléctrico, para encontrar soluciones específicas en cada caso válidas para todos.